

NIEVES ZÚÑIGA

# Ecuador en crisis

*La crisis económica que afecta a Ecuador se ha cebado sobre todo en los sectores populares e indígenas, que en enero salieron a la calle para exigir una distribución más justa de la riqueza. La deuda externa ahoga la economía ecuatoriana y el objetivo del Gobierno es desarrollar una política presupuestaria aceptable por el Fondo Monetario Internacional. Para ello, en los Presupuestos del año 2000 aumentan los impuestos y se reducen los gastos sociales, lo que ha provocado la protesta de la población.*

Ya lo habían avisado los indígenas ecuatorianos durante los 18 largos meses de protestas por la crisis económica y política y, efectivamente, el golpe de Estado se produjo el 21 de enero del año 2000. Un golpe de Estado previsible pero con un final nada esperado, por lo menos para algunos. El plan de dolarización (por el que un dólar equivaldría a 25.000 sucres) establecido a principios de enero por el Gobierno de Jamil Mahuad como solución a una economía al borde del caos, precipitó el golpe. La ocupación desde el 15 de enero de las calles de Quito por parte de los indígenas —que constituyen el 30% de los 12 millones de habitantes del país— pidiendo la destitución de Mahuad, los paros sindicales periódicos y las manifestaciones estudiantiles, con 30.000 soldados y policías para mantener el orden, fue el escenario en el que se desarrolló el asalto al poder. La causa: una situación económica insostenible, caracterizada por la abrupta pérdida de capacidad adquisitiva, la corrupción, el encarecimiento de la vida (en Quito los precios subieron hasta un 35%) y los sueldos mínimos (4 millones de ecuatorianos sobreviven con un salario de 7.500 pesetas al mes).

Indígenas y militares, liderados por los coroneles Fausto Cobo y Lucio Gutiérrez, ocuparon el Congreso autoproclamándose las nuevas autoridades en una Junta de Salvación Nacional que duró tres horas. Para ello contaron con el apoyo de las Fuerzas Armadas presididas por el general y ministro de Defensa, Carlos Mendoza. Mientras, el presidente del Gobierno, Jamil Mahuad, manifestaba su negativa a dimitir al considerarse depositario de la voluntad popular expresada en las urnas. Pocas horas después del asalto, el general Mendoza abandonó, al no poder convencer al jefe del Estado de su dimisión, con el fin de evitar un “estallido social”. Ante el inesperado suceso, los golpistas hablaron de traición y responsabilizaron a Mendoza del fracaso del golpe. Según algunas versiones, el “Judas del cuartelazo” —como fue calificado por los indígenas— “fue el topo que desde el triunvirato informó a los generales sobre el alcance de la sublevación”. Mientras

Nieves Zúñiga es  
periodista

tanto, y de forma prácticamente constitucional, se nombró a Gustavo Noboa —vicepresidente del Gobierno de Mahuad— como sucesor en el cargo de la presidencia. Algunos militares detenidos y unos indígenas que han regresado a sus comunidades defraudados pero no rendidos, es el resultado de un golpe de Estado calificado por el ex presidente Jamil Mahuad de “cantinflada”. Ahora todos los ojos están puestos en Gustavo Noboa, que ya se ha pronunciado en favor de la dolarización y de la política económica dictaminada por su antecesor. La crisis social y política y una fuerte tendencia a la polarización entre ricos y pobres sitúan a Ecuador ante un incierto futuro.<sup>1</sup>

### Antecedentes de la crisis

Desde 1998 Ecuador vive serios apuros financieros. Ese año el país registró la mayor inflación de América Latina (43,4%), creció un 0,8%, y terminó con un déficit fiscal del 6% del Producto Interior Bruto. En septiembre de 1998 comenzó la devaluación desenfrenada del sucre mientras que, por otro lado, subieron las tarifas del combustible y la electricidad. El 1 de octubre del mismo año, los sectores populares iniciaron la primera huelga general, que se repetiría durante dos días, el 10 y 11 de marzo de 1999. Clase obrera, campesinos e indígenas se unieron para protestar contra la política económica neoliberal de Jamil Mahuad. Mientras en Quito se producían choques entre los trabajadores y la policía, en el campo las carreteras eran bloqueadas por los indígenas que demandaban el descenso de los precios de los productos alimentarios. Esta situación puso al país bajo el estado de emergencia dictado por el Gobierno, con miras a neutralizar las amenazas de los trabajadores de paralizar los servicios públicos como el agua, las telecomunicaciones, la electricidad y el petróleo.

Presionado por el fantasma de la deuda externa, el Gobierno incluyó en los Presupuestos del año 2000 el aumento de los impuestos y la reducción de las asignaciones al área social, lo que provocó una confrontación política entre los distintos partidos y una profunda inquietud en la sociedad ecuatoriana. Mientras que el Ejecutivo pretendía destinar el 54% del dinero al servicio de la deuda, el Pachakutic, partido político de mayoría indígena, exigía el 30%. La Confederación de Nacionalidades Indígenas Ecuatorianas (CONAIE) amenazó con la petición de renuncia del presidente Jamil Mahuad y de todos los funcionarios acusados de estar involucrados en el supuesto desvío de fondos públicos para la financiación de su campaña electoral, si no rectificaban su política económica.

Esta crisis se vio agudizada por el bloqueo político y la lentitud en la toma de decisiones del Gobierno de Mahuad, que provocaron la indignación de toda la sociedad. Los sectores populares y la población indígena fueron especialmente perjudicados por la cada vez más injusta distribución de la riqueza, consecuencia de la dinámica económica propia de un país dependiente y deudor. Mediante un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para la reprogramación de la deuda externa, el aumento del impuesto sobre el valor añadido y la convertibilidad monetaria, el Gobierno de Jamil Mahuad pretendía solucionar una crisis demasiado larga.

<sup>1</sup>Ver artículo de José María Tortosa en *Le Monde Diplomatique* de marzo de 2000.

## **Ecuador, al borde del caos**

Cuando Jamil Mahuad, del partido Democracia Popular, accedió al cargo de presidente el 10 agosto de 1998, heredó de su antecesor Fabián Alarcón una difícil situación a la que hacer frente. La política social y la reducción de la pobreza se convirtieron en parte fundamental de la agenda del nuevo mandatario. Los efectos del Niño, que devastó al país entre octubre de 1997 y agosto de 1998, la brusca caída del precio del petróleo, la crisis financiera internacional y las pérdidas ocasionadas por la corrupción, agravaron considerablemente la situación económica del país.

Jamil Mahuad era una de las últimas esperanzas para aliviar una situación económica que amenazaba con desatar una recesión de impredecibles consecuencias, si no se tomaban medidas a tiempo. El gobernante democristiano fue acusado por los movimientos sociales de falta de liderazgo y de tomar medidas económicas que sólo favorecían a los banqueros. La crisis continuó en un ambiente de indignación y engaño. Las medidas económicas significaron la duplicación del precio de la gasolina, el aumento del precio de los alimentos y del impuesto sobre el valor añadido (IVA), y la congelación de la mitad de los depósitos bancarios. Por otro lado, la devaluación del sucre, (durante el mandato de Mahuad el sucre se ha devaluado en un 65%), las fluctuaciones del dólar, la falta de créditos y las inmanejables tasas de interés motivaron la creación de iniciativas de desarrollo económico paralelas a las propuestas del Gobierno. La desenfrenada carrera alcista del dólar, cuya cotización llegó a 18.250 sucres en pocas horas en el mes de octubre de 1999, provocó el cierre de numerosas empresas. En apenas dos semanas se triplicaron los precios, los productos importados desaparecieron y los nacionales aumentaron considerablemente su coste, ya que la industria nacional trabaja con materias primas importadas.

Hacia el final de su mandato, Mahuad veía como única solución una dolarización urgente para evitar que Ecuador se convirtiera en una pesadilla. Sin embargo ya era demasiado tarde. Hoy, el 62,5% de la población ecuatoriana es pobre. La demagógica reforma agraria realizada por las dictaduras militares en la década de los sesenta y la inseguridad en la tenencia de la tierra explican que la pobreza afecte de manera especial a la población rural y sobre todo a los indígenas, quienes han tomado una posición activa y han adquirido gran influencia política, uniéndose a los campesinos y al proletariado —poco organizado— en la lucha por la justicia.

## **Fuerza de los movimientos indígenas ecuatorianos**

En las décadas de los sesenta y setenta la reforma agraria obedeció a la necesidad de modernizar la agricultura. Sin embargo, prácticamente sirvió para acentuar aún más los procesos de diferenciación y descomposición socioeconómica y cultural de la población rural. El Estado remarcó la demanda cultural de los pueblos indígenas, por encima de la todavía inacabada cuestión agraria. De esta forma se acentuó la distancia entre las posiciones de clase y las de corte étnico dentro de la estrategia estatal. Pero ante la creciente pauperización, el movimiento indígena

pronto retomó la reivindicación de sus tierras y la cuestión del reconocimiento de sus derechos políticos. En estos años las corrientes culturalistas, indianistas y etnopolulistas dentro del movimiento indigenista no tomaron mayor fuerza; por el contrario, el movimiento indígena ecuatoriano vivió un proceso de madurez y de unificación organizativa nacional, superando la separación entre etnia y clase. Con el tiempo, la reivindicación étnicocultural fue incorporando contenidos políticos sin quedarse en la mera propuesta etnicista.

La protesta indígena fue acallada por la dura represión del régimen de Febres Cordero (1984-1988), quien impuso una política agraria de apoyo casi exclusivo a la agricultura empresarial agroexportadora. Esta situación cambió con el Gobierno del socialdemócrata Rodrigo Borja (1988-1992), que reconoció la situación de la población indígena como un problema a la vez económico y étnicocultural. Este Gobierno ofertó una nueva forma de trato estatal a los pueblos indígenas, contemplándolos como “nacionalidades” dentro de sus planes, aunque en la práctica se reeditó la política neoindigenista, colocando en un segundo plano el apoyo a los derechos económicos, políticos y culturales de los indios. Una vez más, se puso el énfasis en las políticas educativas y servicios secundarios de bienestar social.

En aquel momento el Estado ecuatoriano, presionado por los organismos financieros internacionales, había restringido el gasto social y su papel “benefactor” de intervencionismo estatal, tratando de instaurar definitivamente una economía de mercado en el país. Esta situación desencadenó uno de los acontecimientos políticos más importantes de la historia ecuatoriana: el levantamiento indígena del Inti Raymi en 1990. Su protagonista fue la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (CONAIE), representativa de todas las organizaciones indígenas ecuatorianas. Durante esta revolución, el Gobierno, angustiado por los acontecimientos y por la simpatía de la sociedad hacia sus oponentes, decidió dialogar con los indígenas bajo la intermediación de la Iglesia católica. El movimiento indígena adquirió una gran importancia para el pensamiento y acción de la izquierda ecuatoriana. Las antiguas tesis políticas sobre la vanguardia obrera como única salida revolucionaria fueron desterradas, ya que el potencial movilizador y transformador de la cuestión étniconacional constituyó una puerta abierta para los planteamientos políticos más progresistas de esta sociedad.

A comienzos de un nuevo siglo, el 21 de enero de 2000, los indígenas ecuatorianos pudieron “tocar” el poder, —hecho insólito en la historia de América Latina—, aunque sólo por un breve espacio de tiempo; alrededor de tres horas, las suficientes para demostrar la tenacidad de pueblos diferentes (10 etnias) unidos en busca de la justicia y la dignidad.

Actualmente la CONAIE es uno de los actores más fuertes entre los movimientos sociales ecuatorianos. Nació en 1986 y tuvo como principal virtud el llenar de contenidos políticos la demanda cultural indígena. Su reivindicación fundamental era la tierra, pero no únicamente como factor productivo sino como elemento integral de una determinada vida sociocultural y como base para defender la condición de nacionalidades de los pueblos indígenas. Pedía una reforma agraria favorable al campesino y la simultánea paralización de la colonización y explotación de los recursos naturales. Entre sus objetivos se encontraban los siguientes: gestionar ante el Gobierno la devolución total de las tierras; defender las culturas

étnicas; concienciar sobre el valor de la medicina tradicional; organizar cursos de capacitación ideológica, política y tecnológica con organizaciones afiliadas; buscar la financiación externa para los proyectos de las nacionalidades indígenas y coordinar las políticas de las organizaciones indígenas de Ecuador.

Diez años después, en 1996, el partido político de mayoría indígena Pachakutic (también llamado Movimiento Unidad-Plurinacional Pachakutic-Nuevo País) se constituyó como “la otra voz” de los indígenas en el panorama político ecuatoriano. Este partido fue el resultado de la extensión del espacio político del movimiento indígena hacia los demás sectores sociales, obreros y campesinos. La propuesta del Pachakutic era colectiva, resultado de un acuerdo común: según este partido, los cambios debían ser globales y estructurales, para superar la política del Gobierno, dirigida exclusivamente a determinados sectores de la sociedad con poder económico o político (como los banqueros o el partido social cristiano). Para lograr un Estado plurinacional, añadían, hay que revisar la arcaica legislación tradicional y tomar conciencia de cada uno de los sectores sociales con sus particularidades. El tema de la identidad, vista como un eje articulador, lo consideraban ausente de la política ecuatoriana. “Mientras no haya ese reconocimiento en nosotros mismos, si no hay originalidad en nosotros mismos, si no hay la recuperación de los valores humanos en nosotros, no vamos a poder cambiar la historia, ni la política, ni la economía de Ecuador”. Pachakutic pretendía transformar una concepción del Estado y de la nación caracterizada por la ausencia del autorreconocimiento de los valores humanos, de la persona y de la colectividad. “Las referencias para el desarrollo del pueblo ecuatoriano están en el mismo pueblo”.

## **La relación entre los indígenas y el Gobierno**

A comienzos de 1999 la relación entre la CONAIE y el Gobierno se encontraba en uno de sus momentos más altos. El motivo era doble: por un lado el cambio de estrategia del movimiento indio y, por otro, la apertura del Ejecutivo hacia los planteamientos indígenas. El presidente de la CONAIE, Antonio Vargas, comunicó que dejaban de lado las movilizaciones para dar paso al diálogo. Poco tiempo antes se había creado el Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador (CODENPE) adscrito a la Presidencia de la República, cuya función principal era la elaboración de propuestas y programas de desarrollo para los pueblos indígenas, pero esta vez directamente de manos de las nacionalidades y pueblos con sus representantes, y no de las organizaciones relacionadas con los asuntos indígenas como ocurría anteriormente. Sin embargo, esta calmada y esperanzadora situación no duró mucho tiempo.

La sucesión de crisis económicas hizo a la CONAIE preparar una ley de desarrollo para las poblaciones campesinas e indígenas, así como propuestas sociales y económicas de ámbito nacional. Su objetivo era lograr un acuerdo social para el desarrollo sostenible y detener la caída de los índices de bienestar de los sectores indígenas más pobres. Los indígenas definieron un modelo económico de desarrollo alternativo el cual “debe ser socioculturalmente compatible y aceptable, ecológicamente sostenible y económicamente rentable. Debe estar inspirado en el principio de reciprocidad, solidaridad, equidad, justicia y respeto”.

*Las referencias para el desarrollo del pueblo ecuatoriano están en el mismo pueblo*

*La deuda externa, que alcanza los 17.000 millones de dólares, es uno de los factores más importantes de la crisis económica de Ecuador.*

A causa del empeoramiento de la situación, los movimientos sociales unieron sus fuerzas y comenzaron las movilizaciones. Actos como el ocurrido en febrero de 1999, cuando la agrupación Jóvenes Indígenas, el Seguro Social Campesino y la Federación Unitaria Provincial de Organizaciones Campesinas del Sur “enterraron” la Constitución de la República, se sucedieron a menudo. Un mes más tarde estudiantes, sindicatos y profesores exigieron al Gobierno rectificaciones en su política económica. En este ambiente de tensión general y tras la huelga del 10 de marzo, la situación para el Ejecutivo se complicó aún más. La CONAIE amenazó al Gobierno de Mahuad con pedir su dimisión si en un plazo de 48 horas no eliminaba el aumento de los precios de los combustibles, anulaba el Estado de emergencia tras la huelga y ordenaba la inmediata devolución del dinero entregado a la Banca privada a través de las cuentas de ahorro y corrientes. A los pocos días, el 20 de marzo, el Gobierno aceptó firmar un acuerdo con la CONAIE basado en los siguientes puntos: congelación del precio del gas de uso doméstico y análisis de una posible congelación de los precios de los combustibles. También se comprometió a crear un fondo para el desarrollo de las nacionalidades y pueblos indígenas (mediante una reforma legal) y a eliminar las distorsiones de las planillas de energía eléctrica para el sector campesino. Finalmente, los movimientos indígenas y el régimen acordaron establecer mesas de concertación, atender las necesidades provinciales y realizar un control de precios.

Todo esto quedó en mero enunciado cuando a comienzos del año 2000, ante la invariabilidad de la situación y tras ser decretada la dolarización por el Gobierno, la CONAIE cumplió con su promesa y miles de indígenas tomaron la ciudad de Quito desde el 15 enero con el objetivo de forzar la caída de Mahuad e instaurar un Gobierno popular. Estas medidas no fueron secundadas por la oposición parlamentaria que, aunque era contraria a las políticas generales del Ejecutivo, sí estaba a favor de la dolarización. Durante la toma de Quito el entonces presidente Mahuad se negó a negociar con la CONAIE mientras continuara con su pretensión de destruir el orden político.

Tanto el líder indígena Antonio Vargas como el arzobispo Alberto Luna (que presidía el “parlamento popular” que los indígenas establecieron durante las manifestaciones) y otras plataformas paralelas que negaban la legitimidad de los poderes del Estado, fueron descalificados por el alcalde de Guayaquil —la segunda ciudad más importante de Ecuador— y el ex presidente del país León Febres Cordero como “payasos”.

Ahora los indígenas se han retirado al campo, pero han dado un plazo de seis meses al nuevo presidente para solucionar el problema. En declaraciones a la televisión, Gustavo Noboa ha declarado que “los indígenas serán atendidos en lo que sea justo, en lo que sea apropiado”. Pero ¿quién decide qué es lo justo y qué lo apropiado?

### **La dolarización y el fantasma de la deuda externa**

La deuda externa, que alcanza los 17.000 millones de dólares, es uno de los factores más importantes de la crisis económica de Ecuador. Sin embargo el decreto de dolarización del Gobierno fue el detonante de lo ocurrido a comien-

zos del año 2000. Según el esperado discurso que pronunció el 15 de enero Jamil Mahuad (economista educado en Harvard) la urgente dolarización era lo único que podía atajar la inflación y la acelerada devaluación del sucre —en 1999 esta moneda sufrió una desvalorización del 655%, y del 20% en lo que va de año— y así evitar la conversión del país en una pesadilla. Según Mahuad, si se rechazara esta propuesta se dispararía la cotización del dolar, la inflación alcanzaría niveles catastróficos, continuaría la fuga de capitales, aumentaría el paro y caería el poder adquisitivo de los salarios. Hechos todos ellos, por otra parte, que ya llevan tiempo ocurriendo en el país sudamericano. De hecho, la inflación había llegado a tal punto a finales de septiembre de 1999 que, ante la imposibilidad de hacer frente a la deuda externa, el Gobierno intentó su renegociación con el Fondo Monetario Internacional (para lo que delineó una estrategia global de reestructuración que agrupaba en un solo paquete la deuda Brady, los Eurobonos, el Club de París y la deuda interna). Mediante la negociación con el FMI, Ecuador aspiraba a una reducción sustancial del monto de 6.000 millones de dólares que tiene en concepto de deuda Brady y a una reprogramación en el tiempo, con tasas de interés razonables, de los Eurobonos. Esta medida no implicaba la suspensión de los pagos de obligaciones con los organismos internacionales de crédito, que son los que desembolsan constantemente recursos para el país. La iniciativa contó con el visto bueno (al menos formal) del FMI, pero éste no dió un paso en firme más allá de sus promesas de ayuda de emergencia.

El modo de tratar el tema de la deuda por parte del Gobierno de Mahuad no convenció al movimiento indígena. Cuando, en abril de 1999, el mandatario anunció que los indicadores económicos no situaban a Ecuador dentro de los parámetros de pobreza establecidos por los países del Grupo de los Siete para considerar una condonación de la deuda externa del país con respecto a los Gobiernos y agencias internacionales de crédito, la Ecuarunari (organización indígena perteneciente a la CONAIE) manifestó su preocupación. Pidió al Congreso Nacional el ingreso de Ecuador dentro de los programas de condonación de deuda externa pública, y solicitó a Mahuad una posición firme y clara en defensa de la soberanía y el desarrollo nacional, planteando la utilización de los fondos condonados en obras de desarrollo e infraestructura para las nacionalidades indígenas, campesinos y sectores pobres del país. En opinión del movimiento indígena, la deuda externa no sirvió para el desarrollo nacional ni mejoró las condiciones de vida del pueblo (el gasto en salud y educación pasó de un 12% en 1980 al 7% en 1990 y, de ahí, al 3,3% en 1999). Por tanto, destinar los escasos ingresos del país al pago del servicio de la deuda reflejaba una posición claramente antipopular y de defensa exclusiva de las clases dominantes. Ecuarunari declaró “de nada nos sirve que los organismos internacionales nos califiquen con buena conducta, cuando el 80% de la población tiene hambre, el desempleo llega al 60% y todo el esquema económico está destruido”.

A partir de la declaración de la moratoria de la deuda externa —la primera declarada por un país latinoamericano desde la puesta en marcha del Plan Brady en 1988-1989— la realidad siguió empeorando: la inflación se situó alrededor del 60% anual y el PIB perdió 7 puntos en el pasado ejercicio.

*Hay que preguntarse el impacto que tendrá la experiencia ecuatoriana en los demás países de América Latina y de otras regiones subdesarrolladas.*

Llegado a este punto y asesorado por expertos monetaristas del Gobierno del ex presidente argentino Carlos Menem, Mahuad estudió la alternativa de la dolarización como única manera de erradicar la hiperinflación. El escenario político no se lo ponía fácil ya que contaba con la oposición sindical, indígena e incluso de sectores de la clase media. Su implantación se presentaba complicada, teniendo en cuenta la expulsión del ex presidente Abdalá Bucaram (electo en agosto de 1996 y derrocado en febrero de 1997) cuando quiso aplicar la conversión monetaria al estilo argentino. Para el plan de dolarización, Mahuad contaba con el apoyo de los principales partidos, entre ellos el Social Cristiano de la oposición, y del grueso del empresariado. A la semana siguiente de conocerse las intenciones de Mahuad los precios sufrieron una fuerte subida (del 35% en algunos artículos) mientras quedaron inmóviles los salarios. Otra consecuencia de la falta de liquidez del Banco Central fue la congelación, durante siete o diez años, de los ahorros bancarios superiores a 4.000 dólares previa entrega de un bono nominal al 7,5%. Esta medida afectó a cerca de 30.000 ecuatorianos de clase media y baja y a jubilados, e impedirá a muchos de ellos disfrutar de su dinero en vida.

La situación a la que se enfrenta ahora Noboa no es fácil. El futuro económico de Ecuador es bastante desesperanzador debido a la insuficiencia de recursos propios y al difícil acceso al crédito internacional, después de que el Gobierno suspendiera el pago de la deuda externa. Las arcas del Estado dependen en gran medida del petróleo y de la inversión extranjera, reacia a instalarse en mercados inestables. De momento los planes de Noboa incluyen llevar a cabo la dolarización, seguida de un plan de privatización y la continuación de las medidas económicas previstas por su antecesor. Además de la resolución de esta pésima situación económica y suponiendo que se lleve a cabo el experimento de la dolarización, hay que preguntarse el impacto que tendrá la experiencia ecuatoriana en los demás países de América Latina y de otras regiones subdesarrolladas.

### **Un futuro incierto**

Tras multitud de promesas, y a pesar de ser el objetivo primordial de su legislatura, Jamil Mahuad no pudo sacar al país de la crisis económica. Él atribuye su forzosa salida del Gobierno a la reducción de los gastos militares en 1998, como consecuencia de la firma de la paz fronteriza con Perú, y al equiparamiento de los salarios de las Fuerzas Armadas con los del resto de los funcionarios. El ex mandatario afirma que su mayor error fue dejarse engañar por los militares. El general Mendoza, a su vez, proclamó públicamente la propuesta realizada por algunos de sus ministros al ex presidente, para romper el orden constitucional y, mediante un autogolpe, gobernar con todos los poderes. Es lo que se ha llamado *fujimorazo*, ya que es lo que hizo el presidente peruano Alberto Fujimori en abril de 1992. Esta propuesta fue rechazada por Mahuad, que se declaró ante todo demócrata.

La sociedad ecuatoriana, frustrada y defraudada, siempre ha acusado al Gobierno de Mahuad de una impavidez peligrosa y de "dejar hacer", sin poner el empeño necesario en la solución de los problemas. Esto provocó, a finales del año pasado, un vacío de poder que fue pronto ocupado por los analistas y editoriales de los periódicos, que llamaron a la sociedad a actuar por sí misma para



solucionar la situación. Hacía tiempo que los analistas hablaban de la alta probabilidad de entrar en un proceso de hiperinflación que provocaría violentas protestas ciudadanas, y así ocurrió. Algunos editorialistas ecuatorianos hablaban de que Ecuador estaba dado al diablo. Ahora está dado a Gustavo Noboa. Antigo vicepresidente del Gobierno de Mahuad, es definido como apolítico (no pertenece a ningún partido) y ferviente católico (pertenece al Opus Dei). “Paz para el Ecuador, vamos a salir adelante” fueron sus primeras palabras tras tomar el poder. Tal y como anunció, momentos antes de firmar el decreto de toma de funciones como presidente, el 22 enero, ha hecho de la lucha contra la corrupción uno de los ejes de su política. De momento ha anunciado que continuará con la política económica prevista y con el proyecto de dolarización. Para ello cuenta con el apoyo de su antecesor, aunque no significa que éste lo considere legítimo ya que, según palabras de Mahuad, él jamás abandonó su cargo. El primer paso se dió el 29 de febrero cuando, tras casi una semana de debates, el Congreso Nacional aprobó la Ley de Transformación Económica conocida como Ley Trole. Esta norma fija los fundamentos y el marco legal para poner en marcha la dolarización y la privatización de las instituciones del Estado. Los indígenas han amenazado con suspender los diálogos con el Gobierno si éste continúa con el proceso de dolarización a través de dicha ley.

La pregunta que se plantean ahora los 12 millones de ecuatorianos es ¿cuánto durará Noboa?